



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

1

DEMANDANTE:	Dolly Emilse Madrigal Jaramillo
DEMANDADA:	Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A.
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
DECISIÓN:	Confirma y adiciona
Radicado	05001-31-05-001-2019-00419-01 (281) 05001310500120190041901

En la ciudad de Medellín, a los diecisiete (17) días de marzo de dos mil veintitrés (2023), la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, Y CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO**, quien actúa como ponente, se reunió para resolver los recursos de apelación de Protección S.A. y Porvenir S.A., así como el grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de Colpensiones, en el proceso ordinario laboral adelantado por la señora **DOLLY EMILSE MADRIGAL JARAMILLO** en contra de **COLPENSIONES, PORVENIR S.A.** y de **PROTECCIÓN S.A.**, frente a la decisión adoptada por el Juzgado de instancia.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 74 y 75 del Código General del Proceso, en los términos del poder obrante a archivo 03Alegatos y poder Porvenir -, se reconoce personería para actuar en representación de Porvenir S.A. al abogado Octavio Andrés Castillo Ocampo con Tarjeta Profesional 380.131 del C.S. de la J.

Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala profiere, por escrito, la siguiente:

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA.

1. ANTECEDENTES:

La señora Dolly Emilse Madrigal Jaramillo presentó demanda en contra de Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A. buscando se declare la ineficacia o nulidad de su traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (en adelante RAIS), disponiendo la reactivación automática de su vinculación al Régimen de Prima Media (en adelante RPM); que se condene a Protección S.A. a trasladar todos los aportes efectuados en favor de la actora, con sus respectivos rendimientos y su equivalencia en semanas, y las costas del proceso.

Fundamentó sus pretensiones en que nació 22 de mayo de 1962; que se afilió al RPM en mayo 28 de 1984 y posteriormente se trasladó al RAIS administrado por la AFP ING Pensiones y Cesantías en el año 2000, entidad que se fusionó con Protección S.A. en el año 2012; que en noviembre de 2012 se trasladó a la AFP Porvenir S.A., sin embargo, aduce que los asesores de las entidades privadas, no le brindaron la debida información acerca de las implicaciones de su traslado.

Admitida la demanda e integrada la litis, Colpensiones y Protección S.A. se pronunciaron oportunamente, oponiéndose a las pretensiones de la demanda. Porvenir por su parte no contestó la demanda.

2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 20 de septiembre de 2022, dispuso:

PRIMERO: DECLARAR la **ineficacia** del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad que solicitara la accionante **DOLLY EMILSE MADRIGAL JARAMILLO**, con CC 43.044.972, el día 13 de enero de 2000, a la **AFP PROTECCIÓN S.A. (...)** por falta al deber de información, quedando igualmente ineficaces los posteriores traslados entre administradoras a la AFP PORVENIR S.A. (...)

SEGUNDO: ORDENAR a **COLPENSIONES**, (...) tener a la demandante **válidamente afiliada** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, y homologar las semanas cotizadas por ésta al RAIS, previo el recibo del correspondiente saldo de la cuenta de ahorro individual como se indicará a continuación.

TERCERO: ORDENAR a **PORVENIR S.A.** a trasladar el saldo total existente en la cuenta de ahorro individual de la demandante (aportes y rendimientos) a **COLPENSIONES** incluidos los porcentajes descontados para garantía de pensión mínima, cuotas de administración, y seguros previsionales, estos porcentajes deberán ser **indexados** desde la fecha en que se descontaron

CUARTO: ORDENAR a PROTECCIÓN S.A., a trasladar a COLPENSIONES los porcentajes descontados para garantía de pensión mínima, cuotas de administración, y seguros previsionales, indexados desde la fecha en que se descontaron.

QUINTO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por las demandadas, conforme la parte motiva de este proveído.

SEXTO: CONDENAR en costas a cargo de PROTECCIÓN S.A., a favor de **DOLLY EMILSE MADRIGAL JARAMILLO**, se señalan agencias en derecho en la suma de TRES MILLONES DE PESOS (\$ 3'000.000).

SÉPTIMO: ABSTENERSE de condenar en costas a COLPENSIONES y a PORVENIR S.A., por lo expuesto en la parte considerativa.

OCTAVO: ORDENAR que la presente decisión sea remitida en consulta a favor de COLPENSIONES a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín.

3

3. RECURSO DE APELACIÓN:

3.1 RAZONES DEL RECURSO

La apoderada de **Protección S.A.** se mostró inconforme con la decisión, respecto a la orden de devolver las comisiones de administración y los seguros previsionales de manera indexada. Sobre las comisiones, indico que estas se descontaron conforme a la normatividad vigente y como contraprestación a una buena administración, las cuales ya se encuentran causadas y pagadas; con relación a los seguros previsionales, estos dineros se descontaron mensualmente y se pagaron a una aseguradora que cubrió el riesgo para una pensión de invalidez y sobrevivencia, dineros que la entidad se encuentra imposibilitada para recobrar a la aseguradora, ya que son un tercero de buena fe. Resalta que la demandante ya no se encuentra afiliada a la entidad y todos los valores fueron trasladados a Porvenir, por lo que tampoco daría lugar a trasladar estos conceptos y mucho menos indexados, aunado a que en el RPM también se realizan estos descuentos.

Porvenir S.A. también interpuso recurso solicitando la revocatoria total de la decisión, en cuanto no se acreditó la existencia en un vicio en el consentimiento, resaltando que el accionante realizó acciones que convalidaron su intención de permanecer en el régimen, como el traslado horizontal entre diferentes AFP. En cuanto a la condena de la devolución del saldo de la cuenta individual, junto con los gastos de administración, seguros previsionales y porcentaje al fondo de garantía de pensión mínima, expresa frente a los gastos que estos se reconocen por la buena gestión administrativa de la cuenta de ahorro individual que generaron unos rendimientos que se ven reflejados de manera positiva en la cuenta de la afiliada, y

se encuentran avalados en la normatividad vigente, a más que no se encuentran en la cuenta de ahorro individual; igualmente, en relación con los seguros previsionales, la demandante durante su afiliación ha gozado de su cobertura, lo que implica que la gestión ya se realizó, y el hecho que los siniestros no hayan acaecido no significa que la actora no se benefició. Finalmente, la orden de la devolución de estos emolumentos indexados implica una doble condena a la entidad, pues el fallo también obliga el reconocimiento de los rendimientos.

4

4. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

El apoderado de Porvenir S.A. presento alegaciones reiterando los argumentos del recurso, resaltando que, no existían razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual, pues la decisión de la parte actora se realizó de forma espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza, y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley para la fecha de afiliación al RAIS.

Colpensiones, señaló que el impacto monetario que acarrea el traslado del régimen no puede ser la causa que lleve a declarar la ineficacia del negocio jurídico y la disparidad en cifras por el aspecto estructural del sistema, no es habilitante para que prospere una demanda de nulidad o ineficacia. No pudiéndose premiar el actuar del afiliado en su permanencia en el RAIS que fue de total negligencia y pasividad, frente a un tema de gran relevancia como lo era su futuro pensional.

En caso de que el despacho considere que la sentencia debe ser confirmatoria, solicita se traslade todo concepto que repose en la cuenta de ahorro individual del afiliado. Conforme a las sentencias SL 4964, 2018, 4989 de 2018, 1421 de 2019, 1689 de 2019, 1452 de 2019, así como las cuotas de administración indexadas, gastos de administración, aportes al fondo de pensión de garantía mínima, para que se garantice el financiamiento de la futura pensión en tanto tales conceptos no se pueden compensar con los rendimientos financieros, porque no hacen parte del fondo sino del demandante y entrarían hacer parte del fondo de naturaleza pública.

Por último, la apoderada de la **demandante**, solicita la confirmación de la sentencia en tanto, en el trámite del proceso quedó probada la falta de información veraz, clara y oportuna por parte de la AFP cuando realizó el traslado de Régimen de Prima

Media al de Ahorro Individual y con posterioridad a dicho traslado, tal situación fue avizorada por el A quo y consolidada en la sentencia.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 PRESUPUESTOS PROCESALES Y ALCANCE DEL RECURSO

5

Conoce la Sala de los recursos de apelación y de la consulta de la sentencia a favor de Colpensiones de conformidad con lo señalado en los artículos 66A y 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

5.2 PROBLEMA JURÍDICO

Esta Sala se ocupará de analizar, si se debe declarar la ineficacia del traslado de la demandante Dolly Emilse Madrigal Jaramillo, con el consecuente regreso al RPM administrado por Colpensiones, y, en caso de ser así establecerá cuáles son las consecuencias que de ello se derivan.

5.3 HECHOS RELEVANTES PROBADOS

De acuerdo con el acervo probatorio arrojado, no hay duda que la demandante nació el 22 de mayo de 1962 como se observa en la registro civil de nacimiento (folio 12 archivo 02Anexos); se afilió al RPM hoy administrado por Colpensiones, el 07 de octubre de 1987, como se infiere de la historia laboral expedida por Colpensiones (folios 29 a 35 archivo 02 ibidem); posteriormente se trasladó al RAIS al fondo privado ING a través de solicitud del 13 de enero de 2000, como se observa en el certificado de Asofondos (folio 45 archivo 10ContestaciónProtección); y finalmente se trasladó a Porvenir S.A. el 01 de octubre de 2012, como se observa en la constancia de traslado de aportes de Protección S.A. (folio 33 archivo 10ibidem).

5.4 INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL.

El primer aspecto que debemos observar consiste en recordar que, de acuerdo con el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, la selección de cualquiera de los regímenes previstos en el literal a) de esa disposición es libre y voluntaria, de manera que, cuando un empleador o cualquier persona natural o jurídica, en cualquier forma, desconozca ese derecho, se hará acreedor a las sanciones del

inciso 1º del artículo 271 de la misma ley. Esta última norma establece que cualquier persona que atente contra el derecho del trabajador a su afiliación, traerá como consecuencia que la afiliación quedará sin efecto.

Lo segundo a considerar es que, si bien la afiliación es libre y voluntaria, también es cierto que, las administradoras de pensiones están compelidas a cumplir con el deber de información, de tal manera que la decisión de traslado esté precedida del cumplimiento de ese mandato.

Acerca del deber de información la CSJ desde la sentencia SL-31989 de 2008, sentó una jurisprudencia muy sólida que se mantiene inclusive hasta esta parte, que es importante memorar:

(...) Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica. Bajo estos parámetros es evidente que el engaño que protesta el actor tiene su fuente en la falta al deber de información en que incurrió la administradora; (...) su obligación era la de anteponer a su interés propio de ganar un afiliado,

Por lo tanto, no le asiste razón a la recurrente por cuanto es insuficiente afirmar que el afiliado expresó su voluntad al permanecer en el RAIS y que su vinculación conserva validez, porque no es posible evidenciar un verdadero consentimiento informado cuando se carece de los elementos suficientes para adoptar una decisión adecuada a las circunstancias particulares del afiliado, tal como lo establecen los artículos 2 y 12 del Decreto 663 de 1993 la entidad administradora siempre ha estado obligada a brindarla.

Es decir, el fondo de pensiones tiene la responsabilidad de proporcionar e indicar al usuario que pretende trasladarse de régimen, todos aquellos elementos que resultan determinantes para tomar una decisión plenamente informada. En ese orden, el traslado no surte efectos cuando se le oculta información o no se le brinda en forma completa, porque en ese caso no existe una decisión verdaderamente libre y voluntaria, ya que la determinación de trasladarse de régimen pensional puede

variar según la información que se brinde (sentencias CSJ SL373-2021 MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo; CSJ SL12136-2014 MP Elsy del Pilar Cuello Calderón y CSJ SL17595-2017 sentencia de instancia)

Por lo tanto, cuando se alega por el afiliado la ausencia de información o la deficiente entrega de ésta por parte de la AFP, es la administradora quien tiene sobre sí la carga de demostrar el cumplimiento de esa obligación, afirmación que encuentra respaldo en el artículo 1604 del Código Civil, pues esta norma señala: «*la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo*».

De tal manera que, al haberse afirmado por la actora que «*no recibió la información*», por tratarse de una negación indefinida, lo releva de probar ese hecho y a su vez, traslada la carga de la prueba en el demandado, quien deberá probar en contrario, es decir, que sí proporcionó la información completa y suficiente, en las etapas preparatorias y previas al traslado.

Por lo tanto, conviene no olvidar el criterio postulado por la CSJ en su Sala Laboral, vertido en la SL19447-2017, en ella profundizó sobre la constatación del deber de información, afirmó que era ineludible, por lo que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación era insuficiente. Es por ello que «*el acto de afiliación o traslado de régimen pensional debe estar acompañado de la decisión libre y voluntaria del afiliado, la cual no se limita a la simple manifestación de quien decide trasladarse, sino que debe ajustarse a los parámetros de libertad informada, es decir, la solicitud y trámite de traslado de régimen pensional, debe estar precedida de una información clara, comprensible y suficiente, sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea*» (CSJ SL7561-2021, CSJ SL5595-2021, CSJ3719-2021), la cual no se infiere de la simple firma del formulario de afiliación.

Se insiste, el cumplimiento del deber de información por parte de las AFP y su acreditación en el proceso, no se puede demostrar con las simples manifestaciones genéricas del afiliado de aceptar las condiciones del traslado, ellas resultan insuficientes ya que quien debía probar la diligencia y cuidado era quien estaba obligado a emplearla, en este caso la respectiva administradora del fondo pensional (CSJ SL4964-2018).

En ese orden de ideas, al presentarse el traslado de la carga de la prueba del afiliado a las Administradoras de Fondos de Pensiones, por ser estas las que cuentan con los medios técnicos y los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, eran Protección S.A. y Porvenir S.A. quienes debían probar en el proceso que brindaron una asesoría personalizada y completa a la demandante al momento de su traslado, analizando las circunstancias particulares de su caso, debiéndole informar por ejemplo, que existen diferentes modalidades pensionales, que el valor de la pensión de vejez en el RAIS depende del capital consignado en la cuenta de ahorro individual; que si no completa el capital suficiente para obtener por lo menos una pensión mínima -equivalente al 110% del SMLMV a la fecha de expedición de la L.100/93, actualizado con el IPC (Índice de Precios al Consumidor), debe seguir cotizando, si es o no beneficiaria del régimen de transición pensional y las ventajas que se derivan del mismo, así como efectuarle las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones, con el cálculo aproximado del monto pensional que le correspondería, y en fin, mostrarle al afiliado **con detalle**, las ventajas y desventajas de tomar la decisión de traslado de régimen pensional, para que la misma sea realmente libre y voluntaria.

Y es que debe reiterarse que, la labor del funcionario del fondo privado de pensiones en el momento previo a hacer efectivo el traslado de régimen, debe trascender al “*deber del buen consejo*”, como lo ha señalado la jurisprudencia laboral, en la medida que es responsabilidad de dichas administradoras y de sus promotores, velar por la información suministrada a sus usuarios -art. 10 D.720/94- por el cual se reglamentaron los artículos 105 y parcialmente el 287 de la Ley 100 de 1993.

Ahora, si bien Protección S.A. (antes ING) afirmó al contestar la demanda que a la actora se le brindó la asesoría requerida para el caso (archivo 10- primera instancia), de acuerdo con la jurisprudencia ya descrita tenía la carga de acreditarlo, sin embargo, ninguna prueba arrimo que dé cuenta de la información realmente suministrada a la demandante en ese momento, pues como lo viene sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la oportunidad de **la información se juzga es al momento del acto jurídico del traslado de régimen pensional**, y no con posterioridad a aquel. En el caso de Porvenir S.A. no contestó la demanda.

Así las cosas, en el caso a estudio considera la Sala que se incumplió uno de los presupuestos para la eficacia del acto de traslado de régimen pensional, esto es, el

deber de información, cuya ausencia, dada su incidencia en el derecho pensional, trae como consecuencia la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional, y con ello, que las cosas vuelvan al estado anterior en el que se encontraban antes de aquella como que la demandante nunca se trasladó al RAIS. Razón por la que en este punto se confirmará la decisión.

5.4 CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA DEL TRASLADO.

La declaratoria de ineficacia implica que las cosas vuelven al mismo estado en que se hallarían de no haber existido el cambio, esto es, se priva de todo efecto práctico al traslado *«bajo la ficción jurídica de que aquella nunca se trasladó al RAIS o, más bien, siempre estuvo afiliada al régimen de prima media con prestación definida»* (CSJ SL1689-2017).

Por lo tanto, considera la Sala que al declararse la ineficacia del traslado de la demandante del RPM al RAIS, **todos aquellos actos jurídicos que se celebraron con posterioridad a la suscripción de dicha afiliación pierden su fuerza vinculante**; por lo que es legítimo que Porvenir S.A. (ultimo fondo donde se encuentra la demandante) traslade a Colpensiones no solo el saldo de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, sino también, los porcentajes destinados a gastos de administración, primas de seguros previsionales y al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados como lo dijo la juez de instancia y como lo ha determinado la jurisprudencia uniforme de nuestro órgano de cierre jurisdiccional desde la sentencia con Rad 31989 del 9 de sept/08, M.P. Eduardo López Villegas, reiterada en las SL 4989 y 4964 del 14 de nov/18, radicados 47.125 y 54.814, respectivamente, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, SL 1688 del 8 mayo/19, SL 2877 del 29/07/2020, Rad. 78667, M.P Clara Cecilia Dueñas Quevedo, SL 3034 Rad. 86961 del 07/07/2021; 3571 Rad. 88476 del 04/08/2021; 3708 Rad 88556 del 18/08/2021; 3709 Rad. 88875 y 3710 Rad. 88550 del 18/08/2021; 3769 Rad, 84296 del 11/08/2021, SL755 Rad 90519, SL756 Rad 90548 del 09/03/2022 y SL1019 Rad 87915 del 16/03/2022, M.P Luis Benedicto Herrera Díaz; y SL843 Rad 85499 del 16/03/2022 M.P Gerardo Botero Zuluaga; correspondiéndole a Protección S.A. (antes ING) devolver los gastos de administración las primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, todo debidamente indexado. Debiéndose confirmar en este punto la decisión, resaltando en lo correspondiente a

la indexación, que esta Corporación se ciñe a los parámetros establecidos recientemente por nuestro órgano de cierre, en sentencias SL 359-2021 y especialmente la SL 950 de 2022, en la que se señala:

... Por ello, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que tal declaratoria obliga a las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones --debidamente indexados-- con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Criterio que resulta igualmente aplicable respecto del porcentaje destinado a constituir el fondo de garantía de pensión mínima.

10

Y es que no comparte la Sala tampoco los argumentos expuestos por las apoderadas judiciales de Protección S.A. y Porvenir S.A. relativos a la no devolución de las cuotas de administración y de los seguros previsionales, por cuanto si bien del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 se desprende que los mismos están previstos tanto para el RPM como para el RAIS, y en los artículos 60 y 104 de la referida ley se establece su pago a cargo de los afiliados, lo cierto es que ante la declaratoria de la Ineficacia del traslado de régimen pensional, al volver las cosas al estado en el que se encontraban antes de la misma, estos no se pueden generar en favor de la Administradora del Fondo privado de pensiones demandada.

En virtud del grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de Colpensiones, la Sala adicionará la decisión en el sentido de precisar que las obligaciones de traslado que recaen en los fondos privados se deberán realizar dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia –art. 16 Decreto 692 de 1994-.

Así mismo, se complementará la sentencia de primer grado disponiendo que el traslado de los recursos deberá hacerse con el suministro de la información prevista en el artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1833 de 2016 -por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones-, esto es, entregando la historia laboral del afiliado con la información discriminada y detallada por cada periodo cotizado, especificando cada valor, “...*junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen ...*”.

4.4 PRESCRIPCIÓN

La excepción de prescripción no está llamada a prosperar por cuanto la acción que involucra el tema de traslado de régimen pensional guarda relación inescindible con los requisitos y valor de la pensión, por lo cual se debe predicar la imprescriptibilidad

de la presente acción, ver al respecto Sentencia SL-1421 de 2019, Radicado No. 56174 de 10 de abril de 2019.

En efecto, de manera reiterada y pacífica, la SCL de la Corte ha defendido la tesis de que las acciones judiciales encaminadas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles. Lo anterior, bajo la premisa de que ni los hechos ni los estados jurídicos prescriben, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que de ello surjan.

11

Conforme con las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia revisada en apelación y consulta se adicionará y confirmará.

Costas de segunda instancia a cargo de Porvenir S.A. y Protección S.A., las agencias en derecho se fijan en \$2.320.000 para cada una de las recurrentes y a favor de la demandante. Con respecto a Colpensiones no hay a la imposición de condena en costas pues se conoció en grado jurisdiccional de consulta.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

6. DECIDE:

PRIMERO: Adicionar los numerales **Tercero y Cuarto** de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, el 20 de septiembre de 2022, en cuanto a disponer que las obligaciones impuestas a **Porvenir S.A. y Protección S.A.** deberán realizarse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia -art. 16 Decreto 692 de 1994-, así mismo que deberán entregar la historia laboral de la afiliada con la información discriminada y detallada por cada periodo cotizado, según las consideraciones de esta sentencia.

SEGUNDO: Confirmar en lo demás la sentencia revisada en apelación y consulta.

TERCERO: Costas de segunda instancia a cargo de Porvenir S.A. y Protección S.A., las agencias en derecho se fijan en \$2.320.000 para cada una de las

recurrentes y a favor de la demandante. No se impone condena en costas a cargo de Colpensiones.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Las Magistradas,

12


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ